

OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 79
15 mayo 2019
Original: español

INFORME No. 71/19
CASO 12.942
INFORME DE SOLUCIÓN AMISTOSA

EMILIA MORALES CAMPOS
COSTA RICA

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 15 de mayo de 2019.

Citar como: CIDH, Informe No. 71/19, Caso 12.942 Solución Amistosa. Emilia Morales Campos.
Costa Rica. 15 de mayo de 2019.



Organización de los
Estados Americanos

INFORME No. 71/19
CASO 12.942
SOLUCIÓN AMISTOSA
EMILIA MORALES CAMPOS
COSTA RICA
15 DE MAYO DE 2019

I. RESUMEN Y ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES DEL PROCESO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

1. El 7 de abril de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la señora Emilia Morales Campos (en adelante “la peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad de la República de Costa Rica (en adelante “Estado”, “Estado costarricense” o “Costa Rica”) por la alegada violación de garantías consagradas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (en adelante la “Declaración” o la “Declaración Americana”), en el marco de la tramitación de una solicitud de un bono familiar de vivienda (en adelante BFV)¹, presentada en el año 1991 y que no habría sido resuelto a la fecha de la emisión del Informe de Admisibilidad². La peticionaria alegó que el resultado de lo anterior ella y su hija vivían en condiciones precarias desde hace años, lo que perjudicó en especial la salud y los derechos de ambas.

2. La peticionaria alegó que el Estado costarricense es responsable por la violación al derecho a la constitución y protección de la familia, a la preservación de la salud y al bienestar, y a la propiedad consagrados en los artículos VI, XI y XXIII de la Declaración Americana, en perjuicio de ella y de su hija, derivada de la falta de respuesta eficaz del Estado en la tramitación de su solicitud.

3. El 3 de abril de 2014, la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad No. 19/14. En su informe, la CIDH concluyó que era competente para examinar la presunta violación de los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), 25 (protección judicial) y 26 (desarrollo progresivo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) y 2 del mismo instrumento.

4. El 3 de septiembre de 2015, las partes iniciaron la búsqueda de una solución amistosa, que se materializó con la firma de un acuerdo de solución amistosa (en adelante “ASA” o “acuerdo”) el 20 de julio de 2018, dentro del marco de la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado costarricense.

5. Durante el proceso de negociación de la solución amistosa, la peticionaria expresó que su única pretensión era obtener una vivienda digna. El 20 de julio de 2018, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa que incluía la pretensión de la parte peticionaria. Es de indicar que la Comisión ha destacado que se trata del primer acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Costa Rica³.

6. Mediante comunicación del 18 de octubre de 2018, el Estado informó de la firma del ASA con la señora Emilia Morales Campos, y remitió copia del mismo.

7. El 5 de abril de 2019, el Estado y la peticionaria enviaron un informe firmado por ambas partes, en el cual comunicaron que ese mismo día se realizó el traspaso de la propiedad de la casa de habitación

¹ El Bono Familiar de Vivienda es un subsidio para la solicitud de viviendas de interés social, que se otorga a petición de parte, para la compra de casa, lote, reparación o ampliación de casa de habitación.

² Ver Informe de Admisibilidad N° 19/14 del 3 de abril de 2014, Caso N° 12.492 - Emilia Morales Campos y Jennifer Emilia Morales Campos vs. Costa Rica.

³ Ver, CIDH, CIDH Saluda avances de Costa Rica en la Implementación del acuerdo de solución amistosa en el caso de Emilia Morales Campos. 4 de febrero de 2019. Disponible electrónicamente en: <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/025.asp>

a la señora Emilia Morales Campos. Asimismo, solicitaron la pronta homologación del acuerdo de solución amistosa firmado el 20 de julio de 2018.

8. En el presente informe de solución amistosa, según lo establecido en el artículo 49 de la Convención y en el artículo 40.5 del Reglamento de la Comisión, se efectúa una reseña de los hechos alegados por el peticionario y se transcribe el acuerdo de solución amistosa, suscrito el 20 de julio de 2018 por la peticionaria y representantes del Estado costarricense. Asimismo, se aprueba el acuerdo suscrito entre las partes y se acuerda la publicación del presente informe en el Informe Anual de la CIDH a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

II. LOS HECHOS ALEGADOS

9. La peticionaria alegó que, desde 1991 ha intentado obtener un Bono Familiar de Vivienda (BFV) primero para comprar una casa y luego para realizar mejoras a una propiedad que recibió en donación por parte de particulares, y que el Estado costarricense le habría impedido el acceso a los recursos para obtener dicho beneficio. La peticionaria señala que las condiciones de la vivienda que le fue donada eran muy precarias y representaba un riesgo para ella y para su hija que en ese momento tenía 11 años. La peticionaria señala además que padece de asma bronquial severa, y que las condiciones de la casa representaban un riesgo para su salud.

10. Expone además que entre 1991 y 1997 intentó conseguir un BFV, para lo cual contactó a las autoridades. Sin embargo, la peticionaria señala que estas autoridades solo habrían limitado a girar oficios al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y al Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo para que colaboraran en el trámite del BFV, pero que no habrían desarrollado ninguna gestión significativa.

11. La peticionaria alegó que el 13 de noviembre de 1997, ella y su hija recibieron una casa en donación por parte de particulares que se encontraban a 1.5 metros de distancia de una acequia. Debido a la humedad y a la erosión del suelo, producto del cauce de agua, la casa se encontraba en un avanzado estado de deterioro e inestabilidad, lo cual representaban un riesgo para ella y para su niña. Alegó que su salud se agravaba puesto que las condiciones de la vivienda no eran adecuadas para una persona asmática. La peticionaria relata que, por lo anterior, necesitaba realizarle mejoras a la propiedad. La peticionaria señala que la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea habría realizado una visita de inspección a la propiedad de la peticionaria, y habría formulado un dictamen en fecha 13 de agosto de 1997 estableciendo que la señora Morales Campos debía denunciar o vender la propiedad para adquirir un bono completo de vivienda que le permitiera conseguir una casa en otro lugar.

12. La peticionaria alegó que el 16 de mayo de 1998, presentó una queja ante la Defensoría de los Habitantes. También señaló que presentó documentos ante una cooperativa pública llamada UNIVICOOP y que ésta los había extraviado, por lo cual no había recibido respuesta de esta institución.

13. El 1 de junio de 1998, el subgerente de la cooperativa UNIVICOOP, a través de un oficio dirigido a la Jefatura de la Oficina de Admisibilidad y Defensa Inmediata de la Defensoría de los Habitantes, mencionó que habían corroborado que la peticionaria y su hija aparecían como copropietarias del inmueble, y que el siguiente paso era tramitar una diligencia de utilidad y necesidad porque la niña aparecía como titular del bien, de manera que se pudieran establecer las limitaciones por parte del Banco Hipotecario de Vivienda (en adelante BANHVI). En el oficio se afirmaba adicionalmente, que la situación se había puesto en conocimiento del abogado que había elaborado la escritura de la vivienda, para que gestionara el trámite.

14. La peticionaria alegó que habría adelantado el trámite de utilidad y necesidad ante el Juzgado de Familia del II Circuito Judicial de San José, que dictó sentencia el 15 de junio de 1998, autorizando a la peticionaria para gravar la finca con el fin de obtener un crédito hipotecario para la construcción de una casa de habitación. La peticionaria indicó que, a pesar de haber realizado varios esfuerzos para continuar con el trámite de la solicitud, su situación no habría sido resuelta, y el trámite habría estado colmado de irregularidades, incluyendo la pérdida de su expediente en las instituciones y una demora irracional frente a

las condiciones de vivienda, su situación de salud, y el riesgo que representaba para ella y para su hija continuar bajo esas circunstancias.

15. Por lo anterior, la peticionaria presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia contra el Banco Hipotecario de Vivienda y la cooperativa UNIVICOOP. Sin embargo, la Corte rechazó de plano el recurso por improcedente el 5 de mayo de 1998, señalando que en el fondo su recurso constituía una queja y que el tribunal no era competente para conocer el caso, toda vez que la investigación y posterior amonestación a las autoridades públicas estaban a cargo de otras instancias administrativas, por lo cual debía denunciar los hechos ante las mismas instituciones manifestando su inconformidad, o acudir a la Defensoría de Habitantes.

16. Por lo anterior, la peticionaria recurrió nuevamente a la Defensoría de Habitantes para que la ayudara a continuar con el trámite del BFV. En la documentación proporcionada por la peticionaria se observa que la Defensoría de Habitantes habría contactado al BANHVI en relación a la solicitud de la peticionaria para obtener el BFV, y le habrían indicado que UNIVICOOP ya no era una entidad facultada para tramitar bonos de vivienda y que su cartera había sido trasladada a la Mutual La Vivienda. La Defensoría habría contactado entonces a la Mutual La Vivienda, donde le habrían informado que el trámite sería muy lento por la cantidad de casos en cartera, y que la Mutual La Vivienda sólo recibía los documentos para dárselos al BANHVI, para que éste a su vez, procediera como correspondiera.

17. El 1 de agosto de 2000, la Defensoría de los Habitantes profirió un informe final con recomendaciones dirigidas tanto al BANHVI, como al UNIVICOOP.

18. De la información proporcionada por la peticionaria, se colige que el 21 de marzo de 2001, el Ministerio de Salud realizó nuevamente una diligencia de inspección de la casa de la peticionaria, en la cual se observaron deficiencias como la inseguridad ocasionada por la debilidad y el deterioro de la estructura y se concluyó que la vivienda ocupada por la peticionaria no cumplía con lo establecido en el Código Urbano, por lo cual se declaró la casa inhabitable y se recomendó que se demoliera. El Ministerio de Salud le habría recomendado al Área de Salud de la zona que le colaborara a la señora Morales Campos a gestionar, ante las autoridades competentes, la construcción de una vivienda antes de emitir la orden de demolición.

19. Asimismo, de la documentación otorgada por la peticionaria, se observa que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias habría realizado otra valoración a la propiedad en febrero de 2002, estableciendo que la vivienda no era segura dada su cercanía con el cauce de la Quebrada Tanque y que el mayor riesgo sobre la vivienda eran las inundaciones. Además, el informe señalaba que todo esto generaba gran riesgo para sus habitantes, y se solicitó a las autoridades del Ministerio de Salud, y del Instituto de Ayuda Social (en adelante IMAS) que intervinieran, en el sentido que la primera institución realizara un informe de declaratoria de inhabilitación y que el segundo órgano reubicara lo más pronto posible a la familia. En abril de 2002, la peticionaria recibió una carta del IMAS indicando no contaba con una respuesta a ese problema.

20. La peticionaria alegó haber enviado una petición al BANHVI en fecha 21 de mayo 2002 ante el Programa Integral de Atención a Familias Costarricenses de Ingresos Mínimos en Extrema Necesidad, en la cual manifestaba que recibía una pensión de invalidez, que vivía con su hija de 15 años, explicaba su situación de necesidad, el hecho de que llevaba 10 años tratando de acceder al BFV, que se le había ordenado desalojar la casa por haber sido declarada inhabitable por el Ministerio de Salud y La Comisión Nacional de Emergencias, y solicitando ser incluida en la lista del Programa de Atención a Familias. De la misma forma, la peticionaria manifiesta que el 23 de julio y 21 de septiembre de 2002 habría solicitado nuevamente la asistencia de la Defensoría de Habitantes para que le ayudaran a obtener dicho beneficio.

21. En la información proporcionada por la peticionaria se observa además que habría enviado una solicitud de información a la Dirección de Auditorías de Calidad del MIVAH y que en diciembre de 2003 habría recibido una nota de la institución indicando "adjunto encontrará un listado de los requisitos que debe aportar para el programa de compra de vivienda existente o compra de lote y construcción a la entidad financiera de su elección". Sin embargo, el oficio no habría incluido información sobre el estado de su solicitud.

22. La peticionaria alega que, en enero de 2004, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos habría efectuado otra visita al predio de la peticionaria, y profirió un informe que establecía el agravamiento de la situación de riesgo y la inseguridad de los habitantes de la casa por el aumento considerable en la erosión y lavado del terreno. Por lo anterior, la mentada Comisión solicitó en el mismo informe al IMAS, al INVU y al MIVAH que prestaran su colaboración al caso.

23. La peticionaria alegó haber enviado cartas al alcalde del Municipio de Goicoechea, y que éste le habría manifestado en mayo de 2004 que no era posible para la municipalidad ayudarle, pero que le enviaría cartas de recomendación al INVU y al IMAS para que la ayudaran. Adicionalmente, el alcalde le habría informado el 3 de junio de 2004 que ella era beneficiaria de un bono a través del INVU y que debía presentar una documentación para poder realizar el trámite.

24. El 26 de julio de 2005, la peticionaria presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación a su derecho a una vivienda digna contra el IMAS y el INVU. Según la información proporcionada por la peticionaria, el IMAS indicó en su contestación que esa institución no otorgaba beneficios de BFV y que dicha actividad estaba a cargo de las entidades autorizadas de acuerdo al Sistema Financiero Nacional de la Vivienda. Por otro lado, el INVU indicó en su respuesta al recurso de amparo que el BANHVI habría ordenado el 17 de mayo de 2005 que no se admitieran casos nuevos, razón por la cual hasta que el BANHVI no emitiera otra directriz, el INVU se encontraría imposibilitado para recibirlas, y que cualquier excepción, debía ser a su vez autorizada por el BANHVI. Adicionalmente, el INVU alegó que la señora Morales Campos no habría realizado ninguna gestión ante sus oficinas para solucionar el problema y que no contaba en esos momentos con los medios necesarios para atender su caso.

25. La Sala Constitucional profirió sentencia el 22 de febrero de 2006 en la cual estableció:

[A]unque el artículo 65 de la Constitución Política establece que el Estado “promoverá la construcción de viviendas populares (...)”, esto no significa que deba proveer de vivienda a todos los habitantes. (...) [en el caso concreto] lo que procede es desestimar este recurso, al no constar ninguna lesión directa a los derechos fundamentales de la amparada. En efecto, como ya se indicó, aunque la Constitución Política establece la obligación del Estado de promover la construcción de viviendas populares y la justa distribución de riqueza, esto dista sustancialmente de la obligación de comprar terrenos y adjudicarlos a las personas que carecen de una habitación y de solucionar directamente el problema de vivienda, pues en realidad lo que conlleva es a que, existiendo las instituciones estatales, o para coadyuvar en la solución del problema, deba garantizarse el acceso a ellas de todas las personas que reúnan los requisitos al efecto, sin que signifique que se le dará una solución a todo el que acceda pues dependerá, entre otros aspectos, del presupuesto institucional, de la habitación legal, y de que el solicitante satisfaga a cabalidad todos los requisitos exigidos. En el caso de la recurrente, de los hechos que se han tenido por acreditados se concluye que sí ha tenido acceso a los mecanismos estatales establecidos para procurar la solución a su problema habitacional y si no ha sido resuelto aún es porque no ha presentado la totalidad de los requisitos exigidos, tal como fue constatado incluso por la Defensoría de los Habitantes en el estudio de su caso⁴.

26. La peticionaria alegó que su solicitud de Bono Familiar de Vivienda no fue resuelta, y que las irregularidades en el manejo de su caso se vieron reflejadas no sólo en la falta de resultado, sino en el desorden de la gestión administrativa. Como ejemplo de lo anterior, señala que el 25 de noviembre de 2008 habría sido notificada de un cobro judicial derivado de un proceso ejecutivo contra ella, instaurado por el INVU en fecha el 9 de diciembre de 2003, y del cual no tenía conocimiento hasta la fecha de esta notificación. Al preguntar en las oficinas del INVU el motivo de dicha deuda, se le habría dicho que era porque un lote bajo radicación 15- B Finca CAPRI III aparecía a nombre suyo desde 1993, y que debía cancelar el dinero, aunque no lo hubiera utilizado, e incluso, si el lote estaba habitado, ella tendría que correr con los gastos de desalojar a las personas por vía judicial. La segunda opción que le habrían propuesto era que renunciara al lote para que el INVU se

⁴ Res. No. 002619-2006 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 28 de febrero de 2006.

encargara del desalojo, y que ellos le darían otro lote, pero que no existía seguridad de que hubiera otro lote disponible en ese momento. Es decir que desde 1993, se le habría asignado a la peticionaria un lote, pero no se le habría notificado y tampoco se habría gestionado el bono para realizar la construcción de una casa nueva en dicho lote.

27. La peticionaria alegó que, además de todas las comunicaciones mencionadas, habría acudido personalmente a las instituciones, en donde le habrían dado la información equivocada, o contradictoria, en el sentido que algunos funcionarios afirmaban que calificaba para el bono, mientras que otros le aseguraban que no era así. En particular, respecto al INVU, la peticionaria manifiesta que en varias ocasiones se negaron a recibir los documentos que ella proporcionaba, le dijeron que su pensión de invalidez era muy baja y que por eso no calificaría para el bono, y más recientemente le habrían indicado que ya no califica para el BFV porque ahora vive sola sin su hija, y que tendría que esperar hasta los 65 años para aplicar nuevamente al bono.

28. Adicionalmente, la peticionaria alegó que se le habría impedido el acceso al derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, no solo por los obstáculos procesales que enfrentó, sino también porque los requisitos que establecía el INVU son imposibles de reunir para ella. Además, la declaración de inhabilitación de su propiedad, le habría hecho imposible enajenarla. Finalmente, la peticionaria menciona que le ha tocado pagar peritajes, escrituras, abogados, inscripciones, avalúos y en general una gran cantidad de documentos y trámites, muchos de los cuales ha pagado con préstamos y que su situación no había sido resuelta.

29. Por todo lo anterior, la peticionaria alegó que se le han violado sus derechos a la protección de la familia, a la preservación de la salud y al bienestar, y a la propiedad consagrados en los artículos VI, XI y XXIII de la Declaración Americana.

III. SOLUCIÓN AMISTOSA

30. El 20 de julio de 2018, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa, que establece lo siguiente:

ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

El Estado costarricense y la parte peticionaria suscriben el presente acuerdo de solución amistosa, respecto de los artículos 5, 8, 19, 25 y 26 de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 y 2.

Según el contexto actual, las gestiones realizadas con el afán de solucionar el problema habitacional, antes de la presentación de la petición el 7 de abril de 2006 ante la CIDH, se suscitaron en un contexto donde no existían procedimientos claros (estandarizados) o al menos mecanismos de orientación para las personas usuarias que buscaban soluciones de vivienda. Sobre este tema, conviene resaltar las constantes manifestaciones de la peticionaria (Emilia Morales Campos), en las múltiples reuniones con el Equipo Interinstitucional, durante este proceso de solución amistosa, al señalar literalmente que:

“...las gestiones realizadas desde los años noventa (específicamente, a partir del año 1991), en cuanto al bono de vivienda (según mis condiciones de salud, capacidad económica y núcleo familiar), se solicitaron a través de las autoridades competentes del Estado en ese momento (Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Comisión Especial de Vivienda, IMAS y UNIVICOOP), con el afán de solucionar mi problema habitacional, y el de mi hija (Jennifer Emilia Morales Campos). No obstante, las instituciones referidas supra, no me garantizaron los mecanismos, la orientación, ni tampoco el acompañamiento para tener acceso a dicho Bono. Por lo anterior, se demuestra que, mi intención no era que el Estado costarricense me regalara nada; sino simplemente que, el Estado me garantizara el acceso al bono de vivienda”.

De suma importancia es señalar que el sistema ha venido en franca evolución y el Estado costarricense ha procurado proveer de herramientas y mecanismos más claros de orientación a las personas que buscan soluciones de vivienda, particularmente a las personas con alguna discapacidad. Asimismo, el Estado ha tomado consciencia de la situación particular y excepcional del Caso 12.942, que tuvo lugar en un momento que antecedió a la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV) de Costa Rica. En ese contexto, Costa Rica contó con la denominada Comisión Especial de Vivienda, (Decreto Ejecutivo N° 17270-P del 29 de octubre 1986), la cual no le garantizó a la señora Emilia Morales Campos los mecanismos estatales mejorados, la orientación, ni tampoco el acompañamiento acerca de las soluciones temporales y permanentes de vivienda.

En el contexto actual y dentro del marco del SNFV, la Fundación Promotora de Vivienda está anuente a vender⁵ la finca de su propiedad inscrita al partido de Alajuela 525479-000 situado en Distrito 7 Puente de Piedra, Cantón 3 Grecia, Provincia 2 Alajuela, por medio del mecanismo del Bono Familiar de Vivienda, a través del programa lote y construcción.

Así, según fue acordado en la reunión con la señora Emilia Morales Campos y el Equipo Interinstitucional, celebrada el día 28 de mayo de 2018, en Cancillería, el Estado costarricense asumiría la compra del inmueble mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, junto con la construcción de la casa de habitación referida *supra*. Por lo anterior, la peticionaria (Emilia Morales Campos de 63 años de edad), no deberá desembolsarle al Estado costarricense ningún monto por concepto de compra de inmueble, ni tampoco, por construcción de la casa de habitación cumpliendo con las normas de accesibilidad contempladas por la Ley N°7600, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad, y la Convención sobre las Personas con discapacidad de Naciones Unidas.

Como parte de los acuerdos alcanzados dentro de este proceso de solución amistosa, adicionalmente serán subsidiados (los gastos de formalización, de inscripción registral y compra venta de inmueble, que conlleva el Bono Familiar de Vivienda respecto a la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo) según las disposiciones vigentes del Banco Hipotecario de la Vivienda.

El Estado costarricense, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, reconoce en la peticionaria (Emilia Morales Campos de 63 años de edad) su colaboración estrecha en este proceso, su activismo con perfil de Derechos Humanos, siempre sujeto al principio de legalidad y al sistema democrático costarricense, para consolidar la solución amistosa del Caso 12.942. Igualmente, el Estado reconoce la incansable lucha de la peticionaria (Emilia Morales Campos de 63 años de edad) durante todo este tiempo (12 años en la CIDH), primeramente en favor de su hija (Jennifer Emilia Morales Campos) cuando era una persona menor de edad al inicio de este proceso, y actualmente en favor de su nieta menor de edad (IMM⁶).

Como parte de los acuerdos alcanzados, se publicará un comunicado de prensa al momento de la firma de este Acuerdo de Solución Amistosa. El comunicado de prensa que emita la Cancillería en relación con el caso 12.942 será publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y será circulado a los medios de prensa, así como en redes sociales.

Las partes llegaron al Acuerdo que se incluye en el presente documento.

⁵ Este es el término legalmente utilizado en estos procedimientos, pero no implica dificultad u obstáculo alguno al acceso que tendrá la señora Emilia Morales Campos al trámite correspondiente.

⁶ La CIDH reserva el nombre de la nieta de la víctima por ser menor de edad al momento de la aprobación de este informe.

Marco de Obligaciones del Estado costarricense.

El artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica estipula que los tratados internacionales tienen rango superior a las leyes. Además, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la medida en que puedan brindar más garantías a las personas, tienen rango superior a la Constitución Política. En este sentido, al haber ratificado los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos, el Estado costarricense ha incorporado dentro del contenido de su ordenamiento jurídico las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷, y otros instrumentos internacionales e interamericanos ratificados por el Estado.

Asimismo, estas disposiciones interamericanas y las interpretaciones que de éstas haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la CIDH –órganos encargados de su supervisión- hacen parte del marco de obligaciones del Estado de Costa Rica⁸. Concretamente, la Corte IDH, ha establecido que:

“cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos [...], cuyos miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin⁹.”

Costa Rica ha sido un Estado históricamente comprometido no solamente con sus obligaciones internacionales generales sino especialmente con el ordenamiento jurídico interamericano. Ha existido en el país una paulatina evolución en el control de convencionalidad y es cada vez una práctica más frecuente que las instancias jurisdiccionales respondan de manera consistente con los estándares interamericanos e internacionales.

En razón de lo explicado *supra*, es importante singularizar las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que conforman el marco de obligaciones del Estado en la presente solución amistosa:

El artículo 5 de la CADH, específicamente: Derecho a la Integridad Personal.

1. *Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.*
2. *Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*

De igual forma, el artículo 8 de la CADH, específicamente: Garantías Judiciales.

1. *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.*

Asimismo, el artículo 19 de la CADH, específicamente: Derechos del Niño.

⁷ Costa Rica es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 8 de abril de 1970.

⁸ Ver, por ejemplo, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 (Expediente 0421-S-90), considerando VII.

⁹ Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012, párr. 330.

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

De igual manera, el artículo 25 de la CADH, específicamente: Protección Judicial.

1. *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

2. *Los Estados partes se comprometen:*

- a) *a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;*
- b) *a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y*
- c) *a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

A los artículos referidos *supra*, debe agregarse el artículo 26 de la CADH (Capítulo III de la CADH, llamado “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”), específicamente: Desarrollo Progresivo.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

En cuanto a las disposiciones de la CADH referidas *supra*, para el Estado costarricense resulta importante destacar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Sobre este tema, la Corte IDH, ha establecido lo siguiente:

101. En este sentido, la Corte considera pertinente recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello¹⁰.

En cuanto a las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para el Estado costarricense resulta importante hacer mención de los siguientes artículos:

- Artículo 6, específicamente: Derecho a la Vida y a la Dignidad en la Vejez.
- Artículo 23, específicamente: Derecho a la Propiedad.
- Artículo 24, específicamente: Derecho a la Vivienda.
- Artículo 29, específicamente: Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias.
- Artículo 31, específicamente: Acceso a la Justicia.

En cuanto a las disposiciones de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, para el Estado costarricense resulta importante ejemplificar el artículo 3 y sus incisos 1.a y 1.b,

¹⁰ Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párrs. 100, 101 y 102.

específicamente: Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. *Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:*

a. *Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;*

b. *Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;*

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO COSTARRICENSE

El Estado costarricense suscribe en conjunto con la peticionaria (Emilia Morales Campos), el presente acuerdo de solución amistosa (a partir de los artículos 5, 8, 19, 25 y 26 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2), por la situación particular y excepcional del Caso 12.942, que antecedió al desarrollo actual del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV) de Costa Rica. Concretamente, la denominada Comisión Especial de Vivienda¹¹ no le garantizó a la señora Emilia Morales Campos los mecanismos estatales mejorados, la orientación, ni tampoco el acompañamiento acerca de las soluciones temporales y permanentes de vivienda.

Antecedentes a la existencia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV).

El Estado costarricense declaró Emergencia Nacional la problemática de Vivienda en el año 1986. Por lo anterior, se creó la Comisión Especial de Vivienda¹², que atendió en Costa Rica múltiples solicitudes de vivienda popular. No obstante, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°17270-P sobre la creación de dicha Comisión, debido a que no eran admisibles trámites de excepción, como los que aplicaba dicha Comisión, para realizar actividad ordinaria de la Administración.¹³

Paralelamente a los esfuerzos que a través de la Comisión Especial de Vivienda realizaba el país en materia de vivienda, se presentó en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley de creación de un Sistema Nacional Financiero para la Vivienda (SNFV).

Entrada en vigencia el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV).

En noviembre del año 1986, entra en vigencia la Ley N°7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV), y de creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

El SNFV está llamado a dar las soluciones permanentes de vivienda de interés social dentro del marco de legalidad aplicable. Este sistema está integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), como ente rector, y las entidades autorizadas (entidades financieras públicas y privadas).

¹¹ Decreto Ejecutivo N° 17270-P del 29 de octubre 1986.

¹² Decreto Ejecutivo N° 17270-P del 29 de octubre 1986.

¹³ Resolución N°3410-92 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992.

Según el artículo 1 de la Ley N°7052, el BANHVI es “...una entidad de interés público...”, que se crea para fomentar el ahorro y la inversión a fin de procurar la solución del problema habitacional existente en el país a finales de los años 80 del siglo pasado.

En ese mismo sentido, el BANHVI se encarga de la calificación de los beneficiarios a partir de los parámetros y normas generales, previamente establecidas por dicho Banco.

Asimismo, a las entidades autorizadas (públicas y privadas), se les asignó la tramitación de las solicitudes de bono y se canalizó los recursos financieros en el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), para subsidiar viviendas a las familias más necesitadas.

Los aspectos que se han venido apuntando adquieren una especial connotación, debido a que una de las cooperativas autorizadas del sistema (UNIVICOOP), indicada en la petición de la señora Emilia Morales Campos, fue liquidada por quiebra en los años noventa.

El Estado costarricense considera fundamental señalar que la quiebra de la cooperativa UNIVICOOP, así como de otras entidades autorizadas en dicho período, implicó una serie de adaptaciones y cambios posteriores que fortalecieron al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV).

De lo anterior es relevante destacar que el SNFV ha venido en franca evolución y ha procurado proveer de herramientas y mecanismos más claros de orientación para las personas que buscan soluciones de vivienda. Asimismo, el Estado costarricense ha instrumentalizado lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política¹⁴ de la República de Costa Rica, y según sus capacidades económicas, se ha permitido que a lo largo de la historia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SNFV) se haya solucionado en Costa Rica un total de 342.201¹⁵ situaciones de vivienda con cargo a fondos públicos.

El Estado ha venido actuando con la mayor buena fe y ha venido tomando todas las medidas a su alcance desde toda su institucionalidad para atender lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana. No obstante, frente al particular y excepcional Caso 12.942, según el contexto actual, el Estado no puede obviar que, a pesar de que la señora Emilia Morales Campos tuvo acceso a los mecanismos estatales para la obtención de una vivienda digna, la situación de la peticionaria (Emilia Morales Campos) se dio en un contexto donde no existían procedimientos claros (estandarizados) o al menos mecanismos de orientación para las personas usuarias que buscaban soluciones de vivienda.

En acuerdo con la peticionaria (Emilia Morales Campos), el Estado costarricense mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se compromete en el momento de suscripción de este Acuerdo de Solución Amistosa, a emitir un comunicado de prensa, reconociendo a la peticionaria (Emilia Morales Campos de 63 años de edad), su colaboración estrecha en este proceso, su activismo con perfil de Derechos Humanos, siempre sujeto al principio de legalidad y al sistema democrático costarricense, para consolidar la solución amistosa del Caso 12.942. Igualmente, el Estado reconoce la incansable lucha de la peticionaria (Emilia Morales Campos de 63 años de edad) durante todo este tiempo (12 años en la CIDH), primeramente en favor de su hija (Jennifer Emilia Morales Campos) persona menor edad al inicio de este proceso, y actualmente en favor de su nieta menor de edad (IMM). El comunicado de prensa que emita la Cancillería en relación con el caso 12.942 será publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y será circulado a los medios de prensa, así como en redes sociales.

¹⁴ Constitución Política de Costa Rica, Artículo 65. *El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.*

¹⁵ A junio de 2018.

MEDIDA DE REPARACIÓN INDIVIDUAL

I. Una medida de reparación es el reconocimiento que hace el Estado costarricense, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la colaboración estrecha de la peticionaria Emilia Morales Campos de 63 años de edad en este proceso, su activismo con perfil de Derechos Humanos, siempre sujeto al principio de legalidad y al sistema democrático costarricense, para consolidar la solución amistosa del Caso 12.942.

II. La segunda medida de reparación es la entrega de una casa de habitación bajo el esquema de Bono Familiar de Vivienda del SFNV, que se construirá en el Lote N°4 del Proyecto de Calle La Cedeña. La escogencia y aceptación de este lote por la parte peticionaria se da por las características puntualizadas a continuación:

- Con excelente clima y crecimiento habitacional.
- Cercanía de los servicios médicos públicos (EBAIS de Grecia).
- Según las condiciones de salud y edad de la señora Emilia Morales y previendo que más adelante, podría utilizar silla de ruedas para su desplazamiento, el acceso a dicha propiedad resulta viable.
- Situado en una zona de buen acceso para una persona sin vehículo.
- Cercanía de las paradas de autobús. No obstante, actualmente no es frecuente el servicio de autobús, debido a la ampliación de la calle pública conocida como “La Cedeña” hasta la calle pública conocida como “Los Rosales”, en Puente Piedra de Grecia. Ahora bien, en cuanto al tema de transporte público, las peticionarias están de acuerdo por ser una situación temporal, por motivo de ampliación de la vía pública.

Una vez que el Banco Hipotecario de la Vivienda apruebe el Bono Familiar de Vivienda a favor de la señora Emilia Morales Campos, y habiéndose presentado los permisos de construcción, la Mutual Cartago de Ahorro y Crédito formalizará el caso para que la peticionaria pueda adquirir el inmueble inscrito al partido de Alajuela folio real 525479-000 que le venderá la Fundación Promotora de Vivienda. Asimismo, una vez aprobados los permisos de construcción, se avanzará con la construcción de la vivienda. La adquisición del inmueble por parte de la señora Emilia Morales, se hará cumpliendo las disposiciones de la Ley N°7052, y la construcción se ajustará a las disposiciones legales que rigen la normativa del Bono Familiar de Vivienda y que han sido aprobadas por el Banco Hipotecario de la Vivienda.

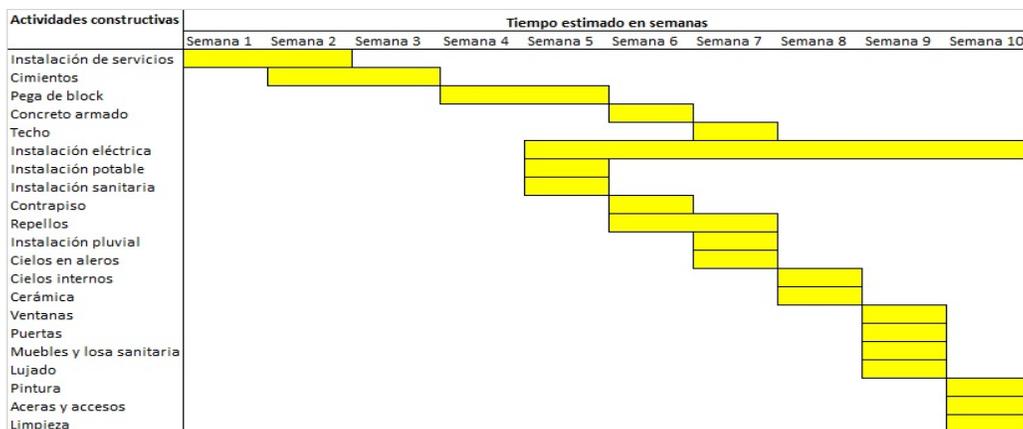
Ahora bien, una vez construida la casa de habitación en el inmueble referido *supra*, cumpliendo con la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad (Ley N°7600); se soluciona de manera definitiva el problema habitacional de la peticionaria Emilia Morales Campos.

La vivienda se podrá construir bajo las siguientes características:

- En cuanto a la distribución de la vivienda, tiene 1 habitación principal, 1 habitación adicional, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 cuarto de pilas y área común.
- En cuanto al diseño de la vivienda, tiene un diseño simplificado (ocupará un mínimo de 35 centímetros de ancho y se le colocarán 4 varillas número 3). Asimismo, tiene 1 fachada principal y 1 fachada posterior.
- En cuanto al sistema constructivo de la vivienda, se utiliza mampostería integrada (clase a o b, con espesor de 12 centímetros).
- En cuanto a la extensión de la vivienda, es de 47 metros cuadrados.
- En cuanto a la estructura del techo, se utiliza tablilla de PVC, acero denominado “perlin”, cercha en tubo cuadrado y lámina ondulada de acero galvanizado.
- En cuanto a la estructura de cimientos, columnas y vigas, se utiliza block tipo A (resistente al fuego) y varilla número 3.

- En cuanto a la estructura de las paredes, se utiliza block tipo A (resistente al fuego) y varilla número 3 (dentro de las paredes, todas las celdas con varillas están rellenas). Asimismo, se utiliza repello externo.
- En cuanto a la pintura y sellador de la vivienda, se utiliza pintura lanco (mate, ininflamable, impermeabilizante), y sellador acrílico blanco.
- En cuanto a las 3 puertas de la vivienda, se utiliza madera laurel para la puerta de acceso principal y puerta de acceso posterior, ambas con llavín de doble paso, y “plywood” para la puerta del baño.
- En cuanto a la estructura del piso de la vivienda y cuarto de pilas, se utiliza cerámica antideslizante, color: terracota, textura: mate.
- En cuanto a la instalación eléctrica, se cumple con la última versión del código eléctrico nacional (NFPA70)”.
- En cuanto al tanque séptico de la vivienda, se instaló 1 tanque séptico con una fosa adicional.
- En cuanto a la estructura de la vivienda, según la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad (Ley N°7600), es importante señalar que:
 - El baño de la vivienda tiene enchape a 1.80 metros, con fácil acceso para ingresar con silla de ruedas.
 - Se instala 1 termo ducha, para agua caliente.
 - Se instala 1 par de barras de seguridad en la ducha e inodoro.
 - Se instala 1 timbre de emergencia, en el baño y cuarto principal.
 - Se instala 1 rampa con baranda para el ingreso y salida de la vivienda.
 - Se instala los tomacorrientes a una altura mayor, para facilitar su uso.

Es necesario señalar que el cronograma sobre el proceso de construcción de la vivienda expuesto a continuación rige una vez sean aprobados los permisos de construcción por la Municipalidad de Grecia.



La fiscalización y supervisión del proceso constructivo de la casa de habitación con la Ley N°7600, que se construirá en el Lote N°4 del Proyecto de Calle La Cedeña, estarán a cargo de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP).

De igual manera, resulta necesario simplificar el procedimiento de formalización, puntualizado a continuación:

- Los trámites de formalización estarán a cargo de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP), que es la Entidad Autorizada encargada de dicho trámite, a través de su oficina. Es importante señalar que MUCAP recibe el expediente con la documentación completa y actualizada del núcleo familiar e inmueble, para su revisión y presentación ante el BANHVI.

Por ende, la formalización deberá ajustarse a las disposiciones vigentes del Banco Hipotecario de la Vivienda.

- Una vez sea propietaria Emilia Morales Campos, la Fundación Promotora de Vivienda colaborará con la señora Morales Campos, para que los servicios básicos queden a nombre de ella, para lo cual deberá la peticionaria (Emilia Morales Campos) presentar la documentación del caso ante las instancias correspondientes.

Tal y como lo ha manifestado la peticionaria (Emilia Morales Campos) en este proceso de solución amistosa, ante un eventual fallecimiento de la peticionaria referida *supra*, antes de homologado este acuerdo ante la CIDH, el núcleo familiar de la señora Emilia Morales Campos (específicamente, la peticionaria Jennifer Emilia Morales Campos y la señorita IMM), serán las únicas beneficiarias legitimadas para gestionar cualquier aspecto derivado del seguimiento e implementación del proceso de solución amistosa.

CUMPLIMIENTO DEL ESTADO COSTARRICENSE DE LAS MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Ambas peticionarias le han donado a la Municipalidad de Goicoechea el inmueble identificado bajo la matrícula número 240792-001-002 situado en Distrito 7 Purral, Cantón 8 Goicoechea, Provincia 1 San José. Lo anterior, por la condición de riesgo, amenaza e inhabilitabilidad que presenta el inmueble referido *supra*, a efecto de que no sea utilizado por ninguna otra persona para habitación, y se recibió por la Municipalidad de Goicoechea bajo esa condición.

El Estado costarricense mediante la Municipalidad de Goicoechea asumió los costos correspondientes a honorarios de abogado, timbres, impuestos y tributos municipales, entre otros, en cuanto al traspaso del inmueble referido *supra*, a la Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior fue acordado en sesión Ordinaria N° 46-17, celebrada el día 13 de noviembre de 2017, Artículo 12°, que en lo que interesa, se establece:

b- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por tanto del dictamen N° 49-17 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como se detalla a continuación:

ACUERDO N° 7

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que:

1°. Se autorice a la Alcaldesa Municipal a realizar los trámites notariales para el traspaso del inmueble identificado bajo la matrícula número 001-240792-001-002, sita distrito 7° Purral, de 136.90 metros cuadrados de área, con plano catastro SJ-378673-97, ubicado en la denominada Calle Morales hacia este Municipio.

(...)”

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA

La celebración del presente acuerdo de solución amistosa y su efectivo cumplimiento, permitirá a las peticionarias (Emilia Morales Campos y Jennifer Emilia Morales Campos) de este caso, y a la señorita Ivannia Moya Morales (nieta de la señora Morales Campos), recibir del Estado costarricense, la solución definitiva del problema habitacional.

Al mismo tiempo, el presente acuerdo de solución amistosa, permitirá al Estado, en palabras de la CIDH, “demostrar su compromiso de respeto y garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas en la Convención Americana y otros instrumentos regionales de protección de los derechos humanos”¹⁶.

¹⁶ CIDH, “Impacto del procedimiento de solución amistosa”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 45/13, 18 diciembre 2013, párr. 5 disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/docs/Informe-Soluciones-Amistosas.pdf

Tal y como la CIDH ha señalado, la efectividad del mecanismo de solución amistosa, reposa tanto en la voluntad de las partes de llegar a una solución amistosa en el asunto, como en el cumplimiento de las medidas de reparación que dicho acuerdo contempla. Lo anterior, ya que “los Estados tienen el deber de cumplir cabalmente y de buena fe con los compromisos asumidos en este”¹⁷.

Así, para garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas a través del presente acuerdo de conformidad con el principio de buena fe, y a efectos de garantizar el adecuado seguimiento en su implementación, las partes:

1. Informarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los avances en el cumplimiento del presente acuerdo de solución amistosa.
2. Únicamente solicitarán la homologación del presente acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente y por escrito, cuando se produzca un cumplimiento de la medida contenida, según la cual: se haya hecho entrega de una casa de habitación cumpliendo con la Ley N°7600, bajo el esquema de Bono Familiar de Vivienda, que se construirá en el Lote N°4 del Proyecto de Calle La Cedeña (inmueble inscrito al partido de Alajuela folio real 525479-000, situado en Distrito 7 Puente Piedra, Cantón 3 Grecia, Provincia 2 Alajuela). Tal y como fue explicado ampliamente en el acápite de Medidas de Reparación Individual, del presente acuerdo de solución amistosa.

IV. DETERMINACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO

31. La CIDH reitera que de acuerdo a los artículos 48.1.f y 49 de la Convención Americana, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio *pacta sunt servanda*, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados¹⁸. También desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.

32. La Comisión Interamericana valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar esta solución amistosa que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención.

33. De conformidad a lo establecido en el acuerdo de solución amistosa, las partes han solicitado conjuntamente a la Comisión que adopte el informe contemplado en el artículo 49 de la Convención Americana.

34. La CIDH observa que dada la información suministrada por las partes hasta este momento y la solicitud de homologación del ASA sometida por las partes a la Comisión, corresponde valorar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo de solución amistosa.

35. Según el informe del Estado de 20 de julio de 2018, durante el acto de firma del acuerdo de solución amistosa, que fue acompañado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño en calidad de testigo de honor, la Primera Vicepresidenta y el Ex canciller de la República de Costa Rica, le ofrecieron disculpas a la peticionaria Emilia Morales Campos, en nombre del Estado de Costa Rica. En dicho acto se señaló expresamente que:

¹⁷ CIDH, “Impacto del procedimiento de solución amistosa”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 45/13, 18 diciembre 2013, párrs. 6 y 230 disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/soluciones_amistosas/docs/Informe-Soluciones-Amistosas.pdf

¹⁸ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), Artículo 26: “**Pacta sunt servanda**”. *Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.*

[E]n representación del Estado costarricense, le pido disculpas a la señora Emilia Morales Campos por el Caso 12.942. Doña Emilia ha luchado por años por que el Estado respondiera a una solicitud donde lo que resulta central es la protección de los derechos humanos de las personas. Doña Emilia por lo que ha reclamado al Estado es por un acceso claro, digno y seguro a sus derechos y sobre todo para la protección de su integridad personal, la de su hija y ahora la de su nieta. El Estado debe garantizar procedimientos claros para las personas. En la actualidad, así lo hace el Estado costarricense, pero doña Emilia experimentó una situación particular y excepcional, que antecedió al desarrollo actual del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SNFV) en Costa Rica y en un contexto donde no se le garantizó a la peticionaria los mecanismos estatales mejorados, la orientación, ni tampoco el acompañamiento para acceder a las soluciones temporales o permanentes de vivienda. Por ello, como medida de reparación específica, el Estado costarricense está facilitando la entrega de una casa de habitación bajo el esquema de Bono Familiar de Vivienda del SFNV a doña Emilia Morales y con esto, Costa Rica cumple con sus obligaciones de derechos humanos en el marco no solo de su legislación sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos [...].

36. Al respecto, al Comisión valora el ofrecimiento de disculpas por parte del Estado de Costa Rica y la dignificación de la señora Emilia Morales y de su lucha en la reivindicación de sus derechos, tanto en el contenido declarativo del acuerdo de solución amistosa como en las palabras de las autoridades que acompañaron el acto de firma de dicho acuerdo.

37. En relación a la cláusula II sobre la medida de reparación individual, el 24 de octubre de 2018, la peticionaria informó que, la casa estaba en proceso de construcción y que se la entregarían en 22 días, debido a que todavía se encontraban construyendo el muro de contención. Asimismo, expresó su satisfacción con el proceso adelantado y remitió registro fotográfico de los avances para la adecuación de la vivienda a sus necesidades y al contenido del acuerdo de solución amistosa.

38. El 18 de enero de 2019, el Estado informó que el 30 de noviembre de 2018, se hizo el acto de entrega formal de la casa de habitación a la señora Emilia Morales, con las adecuaciones comprometidas en el acuerdo de solución amistosa suscrito entre las partes. El Estado proporcionó un amplio registro fotográfico, de video y documental sobre la entrega de la vivienda a la peticionaria. Dicho acto fue publicado en las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y circulado tanto en medios de prensa como en redes sociales¹⁹.

39. El 23 de enero de 2019, la peticionaria indicó que ya tenía acceso a la vivienda digna y a mejor calidad de vida. Asimismo, indicó que su familia, y en particular su nieta, *“tiene ahora un espacio precioso para jugar, un dormitorio digno y un lugar para hacer las tareas y trabajos de la escuela”*.

40. Finalmente, el 5 de abril de 2019, el Estado y la peticionaria remitieron conjuntamente un escrito en el cual indicaron que en la misma fecha, el Estado realizó el traspaso de la casa de habitación a la señora Emilia Morales Campos, bajo el esquema de Bono Familiar de Vivienda del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, dando el detalle de la ubicación de la casa en la Provincia 2 Alajuela. En ese sentido, las partes informaron a la Comisión que en la actualidad la señora Emilia Morales Campos es la propietaria registral de su vivienda, y por tal razón se daba por satisfecha habiendo encontrado en la solución amistosa una solución a su problema habitacional. Tomando en consideración los elementos de información anteriormente descritos, la comisión considera que la cláusula II del acuerdo de solución amistosa se encuentran cumplida totalmente y así lo declara.

¹⁹ Al respecto ver, Comunicado de Prensa, Pagina web ministerio de relaciones Exteriores de Costa Rica. “Comunicado de Prensa “Costa Rica cumple con medida de reparación, según lo acordado tras la firma del acuerdo de solución amistosa”. 20 de julio de 2018”. Disponible electrónicamente en: <https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4345>

Ver también, Página de Facebook de FUPROPI Disponible electrónicamente en : <https://www.facebook.com/140861025933522/videos/vb.140861025933522/487467208413326/?type=2&theater>

41. Por otro lado, la Comisión considera que el resto del contenido del acuerdo es de carácter declarativo y así lo declara.

42. Por las razones anteriores, la CIDH considera el acuerdo de solución amistosa se encuentra totalmente cumplido.

43. La Comisión valora positivamente la firma del primer acuerdo de solución amistosa por parte del Estado de Costa Rica, y los avances el cumplimiento total del mismo.

V. CONCLUSIONES

44. Con base en las consideraciones que anteceden y en virtud del procedimiento previsto en los artículos 48.1.f y 49 de la Convención Americana, la Comisión desea reiterar su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y su satisfacción por el logro de una solución amistosa en el presente caso, fundada en el respeto a los derechos humanos, y compatible con el objeto y fin de la Convención Americana.

45. En virtud de las consideraciones y conclusiones expuestas en este informe,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DECIDE:

1. Aprobar los términos del acuerdo suscrito por las partes el 20 de julio de 2018.
2. Declarar cumplida totalmente la cláusula II del acuerdo de solución amistosa sobre la medida de reparación individual, de acuerdo al análisis contenido en este informe.
3. Declarar cumplido totalmente el acuerdo de solución amistosa.
4. Hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 15 días del mes de mayo de 2019. (Firmado): Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Presidenta; Joel Hernández, Primer Vicepresidente; Antonia Urrejola, Segunda Vicepresidenta; Margarete May Macaulay, Francisco José Eguiguren, Flávia Piovesan y Luis Ernesto Vargas, Miembros de la Comisión.